

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Interlocutorio No. 150.

| | |
|---------------------|---|
| MEDIO DE CONTROL: | Ejecutivo |
| EJECUTANTE: | Comunicación Celular S.A. – COMCEL S.A notificaciones@gha.com.co |
| EJECUTADO: | Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. notificaciones@emcali.com.co |
| MINISTERIO PÚBLICO: | Procurador I Judicial Administrativo 217 procjudadm217@procuraduria.gov.co |
| RADICACIÓN: | 7600133330052023028800 ¹ |
| DECISIÓN: | Remite por falta de jurisdicción |

1. Asunto

Decidir sobre la admisión, inadmisión, rechazo o remisión de la presente demanda ejecutiva, instaurada a través de apoderado judicial por la sociedad Comunicación Celular S.A. – COMCEL S.A., en contra de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

2. Antecedentes

La parte ejecutante pretende que se libre mandamiento de pago a su favor y en contra de la citada entidad, por concepto del 50% de honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento A-20220927/0873 correspondiente a la suma de setecientos noventa y siete millones doscientos veintinueve mil seiscientos dieciséis pesos (\$797.229.616 m/cte.), contenida en la certificación de pago de honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento del 14 de julio de 2023, que debía sufragar las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. – EMCALI S.A. E.S.P., y que fueron canceladas en su lugar por la sociedad ejecutante.

Así mismo, solicita que se libre mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios ordenando a las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. – EMCALI S.A. E.S.P., el pago de las sumas causadas sobre el capital adeudado, liquidadas desde el 28 de junio de 2023, fecha en que se hizo exigible la obligación contenida en la Certificación de Pago de Honorarios y Gastos del Tribunal de Arbitramento del 14 de julio de 2023, valor que se deberá cancelar a la tasa máxima legal permitida de conformidad con las certificaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (Artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el Artículo 111 de la Ley 510 de 1999) hasta la fecha en que se efectúe el respectivo pago.

3. Consideraciones

En lo que corresponde a la competencia respecto de los procesos ejecutivos, el numeral 6 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, prevé lo siguiente:

¹ https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333005202300288007600133

Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

A su turno, la Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones, prevé en su artículo 1º que *«El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje»*, seguidamente el artículo 25 en lo que corresponde a la fijación y gastos de honorarios del Tribunal de Arbitramento, dispone que *«Fracasada en todo o en parte la conciliación, en la misma audiencia el tribunal fijará los honorarios y gastos mediante auto susceptible de recurso de reposición, que será resuelto inmediatamente. Para la fijación, tomará en cuenta la cuantía de las pretensiones de la demanda, determinada de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. Si hubiere demanda de reconvencción, tomará como base la de la cuantía mayor. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, antes del nombramiento de los árbitros, acuerden los honorarios y así se lo comuniquen junto con su designación.»*

En cuanto a la oportunidad para la consignación de los honorarios y gastos, el artículo 27 *ibidem*, dispone lo siguiente:

Artículo 27. Oportunidad para la consignación. En firme la regulación de honorarios y gastos, cada parte consignará, dentro de los diez (10) días siguientes, lo que a ella corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del tribunal, quien abrirá para su manejo una cuenta especial en una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Dicha cuenta deberá contener la indicación del tribunal arbitral y en ella solo podrán administrarse los recursos de este.

Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella podrá hacerlo por esta dentro de los cinco (5) días siguientes. **Si no se produjere el reembolso, la acreedora podrá demandar su pago por la vía ejecutiva ante la justicia ordinaria.** Para tal efecto le bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario. En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago. La certificación solamente podrá ser expedida cuando haya cobrado firmeza la providencia mediante la cual el tribunal se declare competente.

De no mediar ejecución, las expensas pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para lo que hubiere lugar. A cargo de la parte incumplida, se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que cancele la totalidad de las sumas debidas.

Vencidos los términos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto declarará concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso (...). (Negrilla del despacho)

De acuerdo a lo anterior, es posible concluir que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer los procesos ejecutivos derivados de laudos arbitrales en los que haya sido parte una entidad estatal. No obstante, cuando la etapa conciliatoria no prospera y a través de demanda ejecutiva se

pretende conseguir el pago de las sumas correspondientes a los honorarios y gastos del proceso establecidos en el certificado emitido por el presidente del tribunal de arbitramento, la competencia es de la Jurisdicción Ordinaria.

Al respecto, se tiene que, en un asunto similar al acá estudiado, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Auto 834 del 27 de octubre de 2021, al resolver un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, dentro de un proceso ejecutivo presentado por Pórticos Ingenieros Civiles S.A. y Castell Camel S.A.S. integrantes del Consorcio Castell Pórticos, en contra de Fondo Financiero Distrital de Salud, la Secretaría de Salud y el Distrito Capital de Bogotá, donde se pretendía obtener el pago de la suma de \$167.610.906, por concepto de reembolso de honorarios y gastos de un proceso arbitral, así como los intereses moratorios causados, fijó como regla de decisión la siguiente:

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, **la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil es competente para conocer la demanda ejecutiva** a través de la cual una de las partes de un proceso arbitral reclame de la otra el reembolso de los honorarios y gastos del tribunal de arbitramento sufragados por quien promueve el proceso ejecutivo. (Negrilla del despacho)

Lo anterior, con fundamento en el siguiente argumento:

El pronunciamiento mediante el cual el Tribunal de Arbitramento estableció la suma correspondiente a los honorarios y gastos del proceso no puede considerarse un laudo arbitral porque surge como consecuencia del fracaso de la etapa conciliatoria, es decir que no es la sentencia que resuelve el conflicto que dio inicio al proceso. Así, no es posible asignarle la competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos del numeral 6 del Artículo 104 del CPACA, aunque la demanda se haya presentado en contra de una entidad pública, toda vez que la legislación ha establecido de forma clara y precisa la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer este tipo de procesos.

Y mediante **Auto 1042 del 24 de noviembre de 2021**, la Sala Plena de la Corte Constitucional, hizo la siguiente claridad respecto de la competencia en casos como el acá estudiado:

A juicio de la Sala, una interpretación gramatical del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 permite entender que la parte que asume la totalidad de los honorarios y gastos del tribunal, debido al impago de la otra, podrá obtener el correspondiente reembolso, de dos formas. La *primera*, acudiendo al proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, con base en la certificación que expidan el presidente y el secretario del tribunal. En este evento, el Legislador estableció de forma expresa que la competencia para conocer del asunto recae en la jurisdicción ordinaria. La *segunda*, solicitando la ejecución del laudo arbitral en donde se haya dispuesto el pago de los honorarios y los gastos de funcionamiento del tribunal de arbitramento. Para este evento, el Legislador no previó una norma especial de competencia. No obstante, esta forma de ejecutar los honorarios y gastos se rige por el inciso tercero del artículo 27 *ib.*, el cual establece que, “[d]e *no mediar ejecución*”, los montos en mención “*se tendrán en cuenta en el laudo para lo que hubiera lugar*”. En ese sentido, para la Sala es claro que el inciso tercero del artículo 27 *ib.* excluye la hipótesis de ejecución prevista en el inciso segundo *ib.* y, en consecuencia, es posible afirmar que, para la ejecución de los honorarios y gastos, cuando estos sean incluidos dentro de las condenas del laudo arbitral, no existe una norma especial de competencia, como sí ocurre en el evento regulado por el segundo inciso.

18. Esta distinción es relevante para los casos en los que la parte deudora es una entidad pública. Ello, por cuanto, **en caso de que la parte que asumió los gastos que le correspondían a esta última en el proceso arbitral demande su pago, teniendo como título la certificación a la que se refiere el inciso segundo del artículo 27 ib., podrá hacerlo ante la jurisdicción ordinaria, con base en la norma especial de competencia.** Pero, en aquellos eventos en los que se adelante el trámite ejecutivo con base en el laudo arbitral, la jurisdicción competente será aquella que deba conocer de la ejecución del correspondiente laudo arbitral. (Negrilla del despacho)

En aplicación de lo expuesto, el despacho considera que no es competente para conocer del proceso ejecutivo de la referencia, toda vez que la sociedad Comunicación Celular S.A. – COMCEL S.A., inició el proceso con la finalidad de obtener la ejecución de la certificación de los honorarios y gastos del proceso arbitral fechada el 14 de julio de 2023, suscrita por el presidente y el secretario del Tribunal de Arbitraje A-20220927/0873 y, ello, tuvo origen en el fracaso de la audiencia conciliatoria del proceso arbitral, según se evidencia del auto 09 del 9 de mayo de 2023, por lo que la competencia le corresponde a la jurisdicción ordinaria en la especialidad civil, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012.

En consecuencia, se dispondrá la remisión de la demanda ejecutiva a los Juzgados Civiles del Circuito de Cali (reparto), para lo de su competencia.

En consecuencia, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN para conocer del presente asunto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR la presente demanda ejecutivos a los Juzgados Civiles del Circuito de Cali (Reparto), para lo de su competencia, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Cumplido lo anterior, **CANCELAR** la radicación previa anotación en el sistema de información Judicial Samai.

CUARTO: Los sujetos procesales deberán comunicar cualquier modificación en la información de los canales de comunicación electrónica a la dirección of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA CONSTANZA MEJÍA SANTOFIMIO
JUEZ

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en <https://samairj.consejodeestado.gov.co>»